

SEÑORES:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Referencia: Acción de Tutela por mora judicial injustificada

Accionante: Carlos Alberto Gómez Tobón

Accionado: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira Valle del Cauca

CARLOS ALBERTO GÓMEZ TOBÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.555.650, abogado en ejercicio con tarjeta profesional 279.709 y domicilio virtual info@contractualasesores.com, actuando a nombre propio, invocando el artículo 86 de la Constitución Política, acudo a su Despacho para instaurar **ACCIÓN DE TUTELA** contra el **JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA**, con el objeto de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales que a continuación enuncio y los cuales se fundamentan con los siguientes hechos:

HECHOS

1. El día 10 de noviembre de 2021, se radicó demanda laboral ordinaria en contra del Municipio de Palmira, Proyecto de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente-Prisma Ltda y WVV Construcciones e Infraestructura Ltda Surcursal Colombia.
2. Mediante auto interlocutorio N° 0424 del 28 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira- Valle admite la demanda y le asigna el radicado N° 76-520-31-05-002-2021-00151-00.
3. Posteriormente se realizaron las correspondientes notificaciones a los demandados, con fecha del 10 de agosto de 2022.
4. El municipio de Palmira y el llamado en garantía SBS Seguros S.A, dieron contestación a la demanda y al llamamiento respectivamente. Actuaciones que no aparecen registradas en la página de la Rama.
5. Se registra el día 16 de enero de 2023, auto de trámite donde se deja sin efecto las notificaciones a las partes y se requiere a la parte demandante para pasar nuevamente los certificados de existencia y representación legal de los demandados, los cuales fueron allegados oportunamente.

6. El 07 de junio de 2024, se radicó memorial de impulso procesal, por cuanto la última actuación registrada era del desde el día 16 de enero de 2023 fue la última actuación (Auto de trámite).

7. A la fecha de radicación de la presente acción de tutela, el Despacho continúa sin desplegar las acciones pertinentes para que se surtan las etapas del proceso, teniendo en cuenta que desde hace tres (3) años fue radicada la demanda y dos (2) desde su admisión y pese a la solicitud de impulso procesal, el Despacho continúa sin actuar.

8. Por lo anterior se evidencia la VULNERACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, por configurarse una mora judicial injustificada, se procede a radicar esta ACCION DE TUTELA, por ser el mecanismo más idóneo para amparar los derechos vulnerados por la dilación injustificada y la omisión sistemática de los deberes judiciales, toda vez que el incumplimiento en los plazos señalados en la ley para adelantar la actuación judicial y, además no existe un motivo razonable que justifique la demora.

PRETENSIONES

1. Se declare que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira Valle del Cauca, ha vulnerado los derechos fundamentales al DEBIDO PROCEOS Y ACCESO A LA ADMINSTRACIÓN DE JUSTICIA.

2. Se tutele mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCEOS Y ACCESO A LA ADMINSTRACIÓN DE JUSTICIA.

3. Como consecuencia, se ordene al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira Valle del Cauca, que dentro de los diez (10) días hábiles a la notificación del fallo de tutela, proceda a impulsar el proceso instaurado en contra de Municipio de Palmira, Proyecto de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente-Prisma Ltda y WVV Construccoes e Infraestructura Ltda Surcursal Colombia.

DERECHOS VULNERADOS

Derecho Fundamental de Petición, consagrado en el artículo 29, 228 y 229 de la Carta Magna.

PERJUICIO IRREMEDIABLE

El ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, contemplado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, tiene como uno de sus fines que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado, lo cual no se ha evidenciado en el proceso de la referencia, toda vez que este lleva dos (2) años sin actuaciones que permitan surtir las etapas del proceso judicial, esto sin justificación alguna, frente a la quietud del mismo, por lo cual el debido proceso no está cumpliendo su rol fundamental de brindar las garantías suficientes en la administración de justicia.

La Constitución Política consagra los derechos al Debido Proceso art. 29 y al acceso a la administración de justicia art. 229, con el propósito de asegurar la efectividad de los citados derechos, la Ley 270 de 1996 reconoció –entre otros– la celeridad (art. 4º- Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1285 de 2009), la eficiencia (art. 7º) y el respeto por los derechos de los intervinientes en el proceso, como principios orientadores de la administración de justicia, cuya exigibilidad abarca el deber del operador judicial de dictar sus providencias dentro de los términos establecidos por la ley.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

En desarrollo de lo anterior, el artículo 228 del Texto Superior dispone que: “Los términos se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

Al mismo tiempo que el artículo 42 del Código General del Proceso, al referirse a las obligaciones del juez, determina que sus deberes son:

- Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal. (Numeral 1 artículo 42 CGP).
- Prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. (Numeral 3, art. 42 CGP)

- Dictar las providencias dentro de los términos legales, fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal y asistir a ellas. (Numeral 8, art. 42 CGP)

Para el presente caso, se evidencia una mora injustificada, donde no se están cumpliendo los preceptos normativos que regulan la materia, pues no se ha visto que por parte del Juzgado se haya realizado de manera ágil y oportuna un desarrollo judicial del proceso, en donde el Juez como director del proceso, está en el deber de dar trámite al mismo a partir de las actuaciones de las partes, estando obligado a velar por la pronta resolución de las controversias planteadas.

Es así como el artículo 120 del CGP, señala que las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia, es decir las correspondientes a la fase escritural, el pronunciamiento de los Jueces y Magistrados se deberán dictar en un término de diez (10) días para autos y cuarenta (40) para sentencias, razón de más para reforzar la obligación de los administradores de justicia para garantizar un proceso célere y sin dilaciones.

Ahora bien, en cuanto al concepto de MORA JUDICIAL, la Corte Constitucional ha definido este concepto como: “Un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia”, y que se presenta como “Resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos” . No obstante, para establecer si la mora en la decisión de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales, se debe de realizar un análisis sobre la razonabilidad del plazo y verificar el carácter “injustificado” en el incumplimiento de los términos procesales.

Para este efecto, según la sentencia T- 297 de 2006 de la honorable Corte Constitucional, vale la pena traer a colación algunas características de la mora judicial como violatoria del debido proceso, y que se configura por el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente.

El desborde del concepto de plazo razonable involucra un análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente, así como del análisis global de procedimiento y la falta de motivo o justificación razonable en la demora. No obstante, la H. Corte Constitucional también ha precisado que es necesario demostrar que se ha intentado agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitar el

detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso.

Por otra parte, la Sentencia T-803 de 2012, trae algunos supuestos en cuanto a la mora injustificada en las actuaciones judiciales;

- No existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y
- la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial.

Es así también como en sentencia STC-16617-2022, con Magistrado Ponente el Dr. Luis Alonso Rico Puerta, se esboza el concepto al DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA como “La prolongación indefinida de la toma de decisiones en los procesos, atenta gravemente contra la seguridad jurídica de los ciudadanos, e implica el incumplimiento de las tareas propias de la administración de justicia” y el DERECHO AL DEBIDO PROCESO, visto como “Proceso sin dilaciones injustificadas”

La Constitución Política consagra los derechos al debido proceso (art. 29) y al acceso a la administración de justicia (art. 229), los cuales abarcan dentro de su ámbito de protección:

- El derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial;
- El derecho a obtener una respuesta oportuna frente a las pretensiones que se hayan formulado; y
- El derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

Es por ello que con fundamento en lo anterior, se concluye que se está en presencia de una Mora injustificada, por cuanto se ven reflejados los presupuestos normativos frente a las dilaciones injustificadas, en donde en temas de razonabilidad se observa como el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente no se están llevando a cabo y en la demanda impetrada en contra de del Municipio de Palmira, Proyecto de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente-Prisma Ltda y WVV Construcciones e Infraestructura Ltda Surcursal Colombia, se evidencia la falta de motivo o justificación razonable en la demora.

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es el relativo al cumplimiento del requisito de inmediatez; es decir, se debe acreditar que la tutela contra una providencia judicial se hubiere interpuesto en un plazo razonable.

Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados. Es por esto que debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.

La inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial.

Respecto del plazo no es caprichoso pues, por una parte, ha sido un término considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y, por otra, es fruto de la apreciación de lo que acaece en relación con este tipo de acciones. Así, en la Sentencia T-328 de 2010, precedente reiterado en las sentencias T-217 y T-505 de 2013, dijo:

“... No existe una definición de antemano, con vocación general, de la razonabilidad y proporcionalidad para el tiempo de presentación de la acción de tutela contra providencias judiciales. Así, es deber del juez constitucional analizar, en cada caso particular, si la solicitud de amparo que presentada dentro de un término que revista dichas características.

[...] En algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento mi acción en lo establecido en los artículos Art. 29, 228, 229 y 86 de la Constitución Política.



JURAMENTO

Conforme lo establece el artículo 37 de la Constitución Política, manifiesto que no he interpuesto otra acción de tutela que verse sobre los mismos hechos y derechos presentados en ésta, ante cualquier otra autoridad judicial.

NOTIFICACIONES

ACCIONANTE: Recibiré notificaciones en el correo electrónico
info@contractualasesores.com

ACCIONADO: j02lcpalm@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordialmente;


CARLOS ALBERTO GÓMEZ T.